

**No. 34030**

---

**VENEZUELA  
and  
ECUADOR**

**Agreement for the reciprocal promotion and protection of  
investments. Signed at Caracas on 18 November 1993**

*Authentic text: Spanish.*

*Registered by Venezuela on 10 September 1997.*

---

**VENEZUELA  
et  
ÉQUATEUR**

**Accord relatif à l'encouragement et à la protection récipro-  
ques des investissements. Signé à Caracas le 18 novem-  
bre 1993**

*Texte authentique : espagnol.*

*Enregistré par le Venezuela le 10 septembre 1997.*

[SPANISH TEXT — TEXTE ESPAGNOL]

CONVENIO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE VENEZUELA Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR PARA LA PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN RECÍPROCAS DE INVERSIONES

El Gobierno de la República de Venezuela y el Gobierno de la República del Ecuador denominados en adelante las "Partes Contratantes".

Con el deseo de intensificar la cooperación económica entre ambos países.

Con el propósito de crear condiciones favorables para las inversiones de los inversores de una Parte Contratante en el territorio de la otra Parte Contratante, que impliquen transferencias de capitales.

Reconociendo que la promoción y la protección de tales inversiones sobre la base de un convenio contribuirá a estimular el desarrollo económico de ambos Estados.

Han convenido lo siguiente:

ARTICULO I  
DEFINICIONES

A los fines del presente Convenio:

1.- El término "inversión" designa de conformidad con las leyes y reglamentaciones de la Parte Contratante en cuyo territorio se realizó la inversión, todo tipo de activo invertido por inversores de una Parte Contratante en el territorio de la otra Parte Contratante, de acuerdo con la legislación de esta última. Incluye en particular, aunque no exclusivamente:

a) La propiedad de bienes muebles e inmuebles, así como los demás derechos reales tales como hipotecas, cauciones y derechos de prenda.

b) Acciones, cuotas societarias, y cualquier otro tipo de participación en sociedades.

c) Títulos de crédito y derechos a prestaciones que tengan un valor económico; los préstamos estarán incluidos solamente cuando estén regularmente contraídos y documentados según las disposiciones vigentes en el país donde esa inversión sea realizada, y directamente vinculados a una inversión específica.

d) Derechos de propiedad intelectual incluyendo, en especial, derechos de autor, patentes, diseños industriales, marcas, nombres comerciales, procedimientos técnicos, know-how y derechos de llave.

e) Concesiones económicas conferidas por ley o por contrato, y cualesquiera licencias y permisos conferidos conforme a la ley.

Ninguna modificación de la forma jurídica según la cual los activos y capitales hayan sido invertidos o reinvertidos afectará su calificación de inversiones de acuerdo con el presente Convenio.

El presente Convenio se aplicará a todas las inversiones realizadas antes o después de la fecha de su entrada en vigor, pero las disposiciones del presente Convenio no se aplicarán a ninguna controversia, reclamo o diferendo surgido por causas anteriores a su entrada en vigor.

2.- El término "inversor" designa:

a) Toda persona física que sea nacional de una de las Partes Contratantes, de conformidad con su legislación.

b) Toda persona jurídica constituida de conformidad con las leyes y reglamentaciones de una Parte Contratante y que tenga su sede en el territorio de dicha Parte Contratante, independientemente de que su actividad tenga o no fines de lucro.

3.- Las disposiciones de este Convenio no se aplicarán a las inversiones realizadas en el territorio de una Parte Contratante por personas físicas que sean nacionales de la otra Parte Contratante, si tales personas, a la fecha de la inversión, han estado domiciliadas desde hace más de dos años en esta última Parte Contratante, a menos que se pruebe que la inversión fue admitida en su territorio desde el exterior.

4.- El término "ganancias" designa todas las sumas producidas por una inversión, tales como utilidades, dividendos, intereses, regalías y otros ingresos corrientes.

5.- El término "territorio" designa el territorio nacional de cada Parte Contratante, incluyendo aquellas zonas marítimas adyacentes al límite exterior del mar territorial del territorio nacional, sobre el cual la Parte Contratante concernida pueda, de conformidad con su legislación y el derecho internacional, ejercer derechos soberanos o jurisdicción.

## ARTICULO II PROMOCION DE INVERSIONES

Cada Parte Contratante promoverá en su territorio las inversiones de inversores de la otra Parte Contratante, y admitirá dichas inversiones conforme a sus leyes y reglamentaciones.

## ARTICULO III PROTECCION DE INVERSIONES

1.- Cada Parte Contratante de conformidad con las normas y principios del Derecho Internacional, asegurará en todo momento un tratamiento justo y equitativo a las inversiones de inversores de la otra Parte Contratante, y no perjudicará su gestión, mantenimiento, uso, goce o disposición a través de medidas injustificadas o discriminatorias.

2.- Cada Parte Contratante, una vez que haya admitido en su territorio inversiones de inversores de la otra Parte Contratante concederá plena protección legal a tales inversiones y les acordará un tratamiento no menos favorable que el otorgado a las inversiones de sus propios inversores nacionales o de inversores de terceros Estados.

3.- Sin perjuicio de las disposiciones de párrafo (2) de este artículo, el tratamiento de la nación más favorecida no se aplicará a los privilegios que cada Parte Contratante acuerda a inversores de un tercer estado como consecuencia de su participación o asociación en una zona de libre comercio, unión aduanera, mercado común, o acuerdo regional.

4.- Las disposiciones del párrafo (2) de este artículo no serán interpretadas en el sentido de obligar a una Parte Contratante a extender a los inversores de la otra Parte Contratante los beneficios de cualquier tratamiento, preferencia o privilegios resultante de un acuerdo internacional relativo total o parcialmente a cuestiones impositivas.

#### ARTICULO IV EXPROPIACIONES Y COMPENSACIONES

1.- Ninguna de las Partes Contratantes tomará medidas de nacionalización o expropiación ni ninguna otra medida que tenga el mismo efecto, contra inversiones que se encuentran en su territorio y que pertenezcan a inversores de la otra Parte Contratante, a menos que dichas medidas sean tomadas por razones de utilidad pública, sobre una base no discriminatoria y bajo el debido proceso legal. La legalidad de la expropiación será revisable en procedimiento judicial ordinario.

Las medidas serán acompañadas de disposiciones para el pago de una compensación pronta, adecuada y efectiva. El monto de dicha compensación corresponderá al valor de mercado que la inversión expropiada tenía inmediatamente antes de la expropiación o antes de que la expropiación inminente se hiciera pública, si ello ocurre con anterioridad, comprenderá intereses desde la fecha de la expropiación a una tasa comercial normal, será pagada sin demora y será efectivamente realizable y libremente transferible.

2.- Los inversores de una Parte Contratante, que sufrieran pérdida en sus inversiones en el territorio de la otra Parte Contratante, debido a guerra u otro conflicto armado, estado de emergencia nacional, revuelta, insurrección o motín, recibirán de esta última en lo que se refiere a restitución, indemnización, compensación u otro resarcimiento, un tratamiento no menos favorable que el acordado a sus propios inversores o a los inversores de un tercer Estado. Los pagos serán libremente transferibles.

#### ARTICULO V TRANSFERENCIAS

1.- Cada Parte Contratante garantiza que no establecerá restricciones a la libre transferencia de las inversiones y ganancias de los inversores de la otra Parte Contratante, y en particular, aunque no exclusivamente de:

a) El capital y las sumas adicionales necesarias para el mantenimiento y desarrollo de las inversiones.

b) Los beneficios, utilidades, intereses, dividendos y otros ingresos corrientes.

c) Los fondos para el reembolso de los préstamos tal como se definen en el Artículo 1, párrafo (1), (c).

d) Las regalías.

e) El producto de la venta o liquidación total o parcial de una inversión.

f) Las compensaciones previstas en el Artículo IV.

2.- Las transferencias serán efectuadas sin demora, en moneda libremente convertible, al tipo de cambio normal aplicable, a la fecha de la transferencia, conforme con los procedimientos establecidos por la Parte Contratante en cuyo territorio se realizó la inversión. Los cuales no podrán afectar la sustancia de los derechos previstos en este artículo.

#### ARTICULO VI SUBROGACION

1.- Si una Parte Contratante o una de sus entidades o empresas públicas realiza un pago a uno de sus inversores en virtud de una garantía o seguro contra riesgos no comerciales en relación con una inversión en el territorio de la otra Parte Contratante, esta última reconocerá la validez de la subrogación en favor de quien haya realizado el pago respecto de los derechos o títulos del inversor, así como su derecho de ejercerlos. El inversor sólo podrá ejercer los derechos respecto de los cuales no haya operado la subrogación.

2.- Si en virtud de la subrogación a que se refiere este Artículo una Parte Contratante se hace titular de bienes o derechos cuya titularidad está prohibida a los Estados extranjeros por la Constitución o las leyes de la otra Parte Contratante, deberá proceder sin dilación a transferir dicha titularidad a quien pueda ejercerla.

#### ARTICULO VII APLICACION DE OTRAS NORMAS

Si las disposiciones de la legislación de cualquier Parte Contratante o las obligaciones de derecho internacional existentes o que se establezcan en el futuro entre las Partes Contratantes en adición al presente Convenio o si un Acuerdo entre un inversor de una Parte Contratante y la otra Parte Contratante contienen normas, ya sean generales o específicas que otorguen a las inversiones realizadas por inversores de la otra Parte Contratante un trato más favorable que el que se establece en el presente Convenio, aquellas normas prevalecerán sobre el presente Convenio en la medida que sea más favorable.

ARTICULO VIII  
SOLUCION DE CONTROVERSIAS ENTRE LAS  
PARTES CONTRATANTES

1.- Las controversias que surgieren entre las Partes Contratantes relativas a la interpretación o aplicación del presente Convenio serán, en lo posible, solucionadas por la vía diplomática.

2.- Si una controversia entre las Partes Contratantes no pudiera ser dirimida de esa manera en un plazo de seis meses contados a partir del comienzo de las negociaciones, esta será sometida, a solicitud de cualquiera de las Partes Contratantes a un Tribunal Arbitral.

3.- Dicho Tribunal Arbitral será constituido para cada caso particular de la siguiente manera. Dentro de los dos meses de la recepción del pedido de arbitraje, cada Parte Contratante designará un miembro del tribunal. Estos dos miembros elegirán a un nacional de un tercer estado quien, con la aprobación de ambas Partes Contratantes, será nombrado Presidente del Tribunal. El Presidente será nombrado en un plazo de dos meses a partir de la fecha de la designación de los otros dos miembros.

4.- Si dentro de los plazos previstos en el párrafo (3) de este artículo no se hubieran efectuado las designaciones necesarias, cualquiera de las Partes Contratantes podrá, en ausencia de otro arreglo, invitar al Presidente de la Corte Internacional de Justicia a que proceda a los nombramientos necesarios. Si el Presidente fuera nacional de una de las Partes Contratantes o cuando, por cualquier razón, se hallare impedido de desempeñar dicha función, se invitará al Vicepresidente a efectuar los nombramientos necesarios. Si el Vicepresidente fuera nacional de alguna de las Partes Contratantes, o si se hallase también impedido de desempeñar dicha función, el miembro de la Corte Internacional de Justicia que le siga inmediatamente en el orden de precedencia y no sea nacional de alguna de las Partes Contratantes, será invitado a efectuar los nombramientos necesarios.

5.- El Tribunal Arbitral tomará su decisión por mayoría de votos. Tal decisión será obligatoria para ambas Partes Contratantes. Cada Parte Contratante sufragará los gastos de su miembro del Tribunal y de su representación en el procedimiento arbitral. Los gastos del Presidente, así como los demás gastos serán sufragados en principio por partes iguales por las Partes Contratantes. No obstante, el Tribunal Arbitral podrá determinar en su decisión que una mayor proporción de los gastos sea sufragada por una de las dos partes Contratantes, y este laudo será obligatorio para ambas Partes Contratantes. El tribunal determinará su propio procedimiento.

ARTICULO IX  
SOLUCION DE CONTROVERSIAS ENTRE UN INVERSOR Y LA  
PARTE CONTRATANTE RECEPTORA DE LA INVERSION

1.- Toda controversia entre un inversor de una Parte Contratante y la otra Parte Contratante respecto del cumplimiento por ésta de las disposiciones de este Convenio será, en la medida de lo posible, solucionada por consultas amistosas.

2.- Si la controversia no hubiera podido ser solucionada en el término de seis meses a partir del momento en que hubiera sido planteada por una u otra de las Partes, podrá ser sometida, a pedido del inversor:

O bien a los tribunales competentes de la Parte Contratante en cuyo territorio se realizó la inversión,

- O bien al arbitraje internacional en las condiciones descritas en el párrafo (3).

Una vez que un inversor haya sometido la controversia a las jurisdicciones de la Parte Contratante implicada o al arbitraje internacional, la elección de uno u otro de esos procedimientos será definitiva.

3.- Si el inversor resuelve someter la controversia a arbitraje, éste se efectuará en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (C.I.A.D.I.), creado por el "Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a las Inversiones entre Estados y Nacionales de otros Estados", abierto a la firma en Washington el 18 de marzo de 1965, cuando cada Estado Parte en el presente Convenio haya adherido a aquel. Mientras esta condición no se cumpla, cada Parte Contratante da su consentimiento para que la controversia sea sometida al arbitraje conforme con el reglamento del Mecanismo Complementario del C.I.A.D.I. para la administración de procedimientos de conciliación, de arbitraje o de investigación.

- Si por cualquier motivo no estuviere disponible el CIADI ni su mecanismo complementario, la controversia será sometida, a petición del inversor, a un tribunal de arbitraje "ad hoc" establecido de acuerdo con las reglas de arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (C.N.U.D.M.I.).

4.- La sentencia arbitral se limitará a determinar si la Parte Contratante ha incumplido este Convenio, si ese incumplimiento ha causado un daño al inversor y, si este fuere el caso, a fijar el monto de la indemnización correspondiente.



5.- Las sentencias arbitrales serán definitivas y obligatorias para las partes en la controversia. Cada Parte Contratante las ejecutará de conformidad con su legislación.

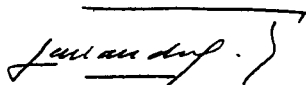
ARTICULO X  
ENTRADA EN VIGOR, DURACION Y TERMINACION

1.- El presente Convenio entrará en vigor el primer día del segundo mes a partir de la fecha en que las Partes Contratantes se notifiquen por escrito que han completado los respectivos requisitos constitucionales para la entrada en vigor de este Convenio. Su validez será de diez años. Después permanecerá en vigor hasta la expiración de un plazo de doce meses a partir de la fecha en que alguna de las Partes Contratantes notifiquen por escrito a la otra Parte Contratante su decisión de dar por terminado este Convenio.

2.- Con relación a aquellas inversiones efectuadas con anterioridad a la fecha en que la notificación de terminación de este Convenio se haga efectiva, las disposiciones de los Artículos I a IX continuarán en vigencia por un período de diez años a partir de esa fecha.


Hecho en Caracas, el 18 de noviembre de 1993, en dos ejemplares originales, en el idioma español siendo los dos textos igualmente auténticos.

Por el Gobierno  
de la República de Venezuela:



FERNANDO OCHOA ANTICH  
Ministro de Relaciones Exteriores

Por el Gobierno  
de la República del Ecuador:



DIEGO PAREDES PEÑA  
Ministro de Relaciones Exteriores

## [TRANSLATION — TRADUCTION]

AGREEMENT<sup>1</sup> BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF VENEZUELA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ECUADOR ON THE RECIPROCAL PROMOTION AND PROTECTION OF INVESTMENTS

The Government of the Republic of Venezuela and the Government of the Republic of Ecuador, hereinafter referred to as “the Contracting Parties”,

Desiring to intensify economic cooperation between the two countries,

Seeking to create favourable conditions for investments made by investors of each Party in the territory of the other Party which involve transfers of capital,

Recognizing that the promotion and protection of such investments on the basis of an agreement will help to stimulate the economic development of the two States,

Have agreed as follows:

*Article I*

## DEFINITIONS

For the purposes of this Agreement:

1. The term “investment” means, in accordance with the laws and regulations of the Contracting Party in whose territory the investment was made, every type of asset invested by investors of one Contracting Party in the territory of the other Contracting Party, in accordance with the legislation of the latter. It includes in particular though not exclusively:

(a) Movable and immovable property and any other rights *in rem*, such as mortgages, securities and liens;

(b) Shares and any other form of participation in companies;

(c) Debt-claims and entitlements to services having an economic value; loans shall be included only when they are duly contracted and documented in accordance with the measures in force in the country in which the investment is made and are directly connected with a specific investment;

(d) Intellectual property rights including, in particular, copyrights, patents, industrial designs, trade marks, trade names, technical processes, know-how and goodwill;

(e) Economic concessions conferred by law or by contract, and any lawfully conferred licences and permits.

No alteration in the legal form in which assets and capital were invested or reinvested shall affect their classification as investments under this Agreement.

<sup>1</sup> Came into force on 1 February 1995 by notification, in accordance with article X.

This Agreement shall apply to all investments made before or after the date of its entry into force. However, the provisions of this Agreement shall not apply to any controversy, complaint or dispute whose cause predates its entry into force.

2. The term “investor” means:

(a) Any natural person who is a national of one of the Contracting Parties, in accordance with its legislation;

(b) Any juridical person incorporated under the laws and regulations of a Contracting Party and having its headquarters in the territory of that Contracting Party, regardless of whether or not it is a profit-making concern.

3. The provisions of this Agreement shall not apply to investments made in the territory of one Contracting Party by natural persons who are nationals of the other Contracting Party if such persons have been domiciled in the latter Contracting Party for more than two years prior to the date of the investment, unless it can be demonstrated that the investment was made from outside its territory.

4. The term “returns” means the amounts yielded by an investment, such as profits, dividends, interest, royalties and other current revenue.

5. The term “territory” means the national territory of each Contracting Party, including the maritime zones adjacent to the external limit of the territorial sea thereof, over which the Contracting Party concerned may exercise sovereign rights or jurisdiction in accordance with its own law and international law.

## *Article II*

### PROMOTION OF INVESTMENTS

Each Contracting Party shall promote in its territory investments by investors of the other Contracting Party and shall permit such investments in accordance with its laws and regulations.

## *Article III*

### PROTECTION OF INVESTMENTS

1. Pursuant to the norms and principles of international law, each Contracting Party shall ensure at all times fair and equitable treatment of the investments of investors of the other Contracting Party and shall not impair by unjustifiable or discriminatory measures the management, maintenance, use, enjoyment or disposal thereof.

2. Each Contracting Party, once it has permitted investments in its territory by investors of the other Contracting Party, shall grant full legal protection to such investments and shall accord to them treatment which is no less favourable than that accorded to investments of its own national investors or investors of third States.

3. Without prejudice to the provisions of paragraph 2 of this article, most-favoured-nation treatment shall not apply to the privileges which each Contracting Party extends to investors of a third State by virtue of participation in or association with a free-trade area, customs union, common market or regional arrangement.

4. The provisions of paragraph 2 of this article shall not be so construed as to oblige a Contracting Party to extend to investors of the other Contracting Party the

benefits of any treatment, preference or privileges arising out of an international agreement dealing wholly or in part with fiscal matters.

#### *Article IV*

##### EXPROPRIATION AND COMPENSATION

1. Neither Contracting Party shall take nationalization or expropriation measures or any other measure having equivalent effect against investments which are in its territory and belong to investors of the other Contracting Party, unless such action is taken in the public interest, on a non-discriminatory basis and by due process of law. The legality of the expropriation shall be subject to review in an ordinary judicial proceeding.

The measures shall be accompanied by arrangements for the prompt payment of adequate and effective compensation. The amount of such compensation shall represent the market value of the expropriated investment immediately prior to expropriation, or before the imminent act of expropriation was made public if that was earlier, shall bear interest at a normal commercial rate from the date of expropriation, shall be paid without delay and shall be readily convertible and freely transferable.

2. Investors of one Contracting Party who suffer losses in respect of their investments in the territory of the other Contracting Party owing to war or other armed conflict, a state of national emergency, revolt, insurrection or riot shall receive from the latter Party, as regards restitution, indemnification, compensation or other settlement, treatment no less favourable than that accorded to its own investors or investors of a third State. Payments shall be freely transferable.

#### *Article V*

##### TRANSFERS

1. Each Contracting Party shall ensure that no restrictions are placed on the free transfer of investments and returns of investors of the other Contracting Party and in particular though not exclusively of:

- (a) Capital and additional funds required to maintain and develop investments;
- (b) Earnings, profits, interest, dividends and other current revenue;
- (c) Funds for the repayment of loans as defined in article I, paragraph 1 (c);
- (d) Royalties;
- (e) Proceeds from the total or partial sale or liquidation of an investment;
- (f) Compensation as provided for in article IV.

2. Transfers shall be made without delay, in freely convertible currency, at the rate of exchange normally applied on the date of transfer, in accordance with the procedures established by the Contracting Party in whose territory the investment was made. Such procedures shall not affect the substance of the rights provided for in this article.

## Article VI

### SUBROGATION

1. If a Contracting Party or one of its public agencies or enterprises makes a payment to one of its investors by virtue of a guarantee or non-commercial risk insurance in respect of an investment in the territory of the other Contracting Party, the latter Party shall recognize as valid the subrogation of the payer to the rights or claims of the investor and the right of the payer to exercise them. The investor may exercise only the rights which have not been subrogated.

2. If, by virtue of the subrogation to which this article refers, a Contracting Party acquires title to property or rights whose ownership by foreign States is prohibited by the Constitution or the laws of the other Contracting Party, it must proceed without delay to transfer that title to someone who is able to exercise it.

## Article VII

### APPLICATION OF OTHER RULES

If the law of either Contracting Party or obligations under international law existing at present or established hereafter between the Contracting Parties in addition to this Agreement or an agreement between an investor of one Contracting Party and the other Contracting Party contains regulations, whether general or specific, entitling investments made by investors of the other Contracting Party to treatment more favourable than that provided for in this Agreement, such regulations shall, to the extent that they are more favourable, prevail over this Agreement.

## Article VIII

### SETTLEMENT OF DISPUTES BETWEEN THE CONTRACTING PARTIES

1. Any disputes between the Contracting Parties concerning the interpretation or application of this Agreement shall, to the extent possible, be settled through the diplomatic channel.

2. If a dispute between the Contracting Parties cannot be settled by this means within six months of the start of the negotiations, it shall, at the request of either Contracting Party, be submitted to an arbitral tribunal.

3. The arbitral tribunal shall be constituted for each individual case as follows. Within two months of the request for arbitration each Contracting Party shall appoint a member of the tribunal. The two members shall choose a national of a third country who, with the approval of the two Contracting Parties, shall be appointed presiding arbitrator of the tribunal. The presiding arbitrator shall be appointed within two months of the date of appointment of the other two members.

4. If the necessary appointments have not been made by the deadlines established in paragraph 3 of this article, either of the Contracting Parties may, in the absence of some other arrangement, invite the President of the International Court of Justice to make the appointments. If the President is a national of one of the Contracting Parties or is prevented from discharging the said function for any reason, the Vice-President shall be invited to make the appointments. If the Vice-President is also a national of one of the Contracting Parties or is also prevented

from discharging the said function, the member of the International Court of Justice who follows him most closely in the order of precedence and is not a national of either Contracting Party shall be invited to make the appointments.

5. The arbitral tribunal shall make its awards by a majority of votes. Such awards shall be binding on both Contracting Parties. Each Contracting Party shall bear the cost of its own member and of its representatives in the arbitral proceedings. The cost of the presiding arbitrator and the remaining costs shall as a general rule be borne equally by the Contracting Parties. The arbitral tribunal may, however, determine in its award that one of the two Contracting Parties shall assume a larger share of the costs, and such decision shall be binding on both Contracting Parties. The tribunal shall determine its own procedure.

### Article IX

#### SETTLEMENT OF DISPUTES BETWEEN AN INVESTOR AND THE CONTRACTING PARTY IN WHICH THE INVESTMENT WAS MADE

1. Any dispute between an investor of a Contracting Party and the other Contracting Party concerning implementation by the latter of the provisions of this Agreement shall, to the extent possible, be settled by means of amicable consultations.

2. If the dispute cannot be settled within six months of the time it was initiated by one of the Parties, it may be submitted, at the request of the investor, to:

- The competent courts of the Contracting Party, in whose territory the investment was made; or
- International arbitration, on the terms laid down in paragraph 3.

Once an investor has submitted the dispute to the courts of the Contracting Party in question or to international arbitration, the choice of one or other of those procedures shall be final.

3. If the investor decides to have recourse to arbitration, the dispute shall be submitted to the International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID), established by the Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of Other States, which was opened for signature in Washington, D.C., on 18 March 1965,<sup>1</sup> once both States Parties to this Agreement have acceded to the Convention. Until such condition has been met, each Contracting Party agrees that the dispute shall be submitted to arbitration in accordance with the rules of the Additional Facility of ICSID for the Administration of Conciliation, Arbitration and Fact-Finding Proceedings.

If for any reason ICSID or its Additional Facility is not available, the dispute shall be submitted, at the request of the investor, to an *ad hoc* arbitral tribunal established under the Arbitration Rules of the United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL).<sup>2</sup>

4. The arbitral award shall be limited to determining whether there is a breach of this Agreement by the Contracting Party, whether such breach has caused harm

<sup>1</sup> United Nations, *Treaty Series*, vol. 575, p. 159.

<sup>2</sup> *Ibid.*, *Official Records of the General Assembly, Thirty-first Session, Supplement No. 17 (A/31/17)*, p. 34.

to the investor and, if such is the case, the amount of compensation which is appropriate.

5. Arbitral awards shall be final and binding on the parties to the dispute. Each Contracting Party shall execute them in accordance with its legislation.

*Article X*

ENTRY INTO FORCE, DURATION AND TERMINATION

1. This Agreement shall enter into force on the first day of the second month following the date on which the Contracting Parties notify each other in writing that they have fulfilled their respective constitutional requirements for its entry into force. It shall be valid for ten years. Thereafter it shall remain in force for a period of twelve months from the date on which one of the Contracting Parties notifies the other Contracting Party in writing of its decision to terminate this Agreement.

2. In respect of investments made before the date on which the notice of termination of this Agreement becomes effective, the provisions of articles I to IX shall continue in effect for a period of ten years from such date.

DONE at Caracas on 18 November 1993 in duplicate in the Spanish language, both texts being equally authentic.

For the Government  
of the Republic of Venezuela:

FERNANDO OCHOA ANTICH  
Minister of Foreign Affairs

For the Government  
of the Republic of Ecuador:

DIEGO PAREDES PEÑA  
Minister for Foreign Affairs

[TRADUCTION — TRANSLATION]

ACCORD<sup>1</sup> ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DU  
VENEZUELA ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE  
DE L'ÉQUATEUR RELATIF À L'ENCOURAGEMENT ET À LA  
PROTECTION RÉCIPROQUES DES INVESTISSEMENTS

Le Gouvernement de la République du Venezuela et le Gouvernement de la République de l'Équateur, ci-après dénommés « les Parties contractantes »,

Désireux de renforcer la coopération économique entre les deux Etats,

Souhaitant créer des conditions favorables aux investissements effectués par les investisseurs d'une Partie contractante sur le territoire de l'autre Partie contractante au moyen de transferts de capitaux,

Reconnaissant que l'encouragement et la protection de tels investissements sur la base d'un accord contribuera à favoriser le développement économique des deux Etats,

Sont convenus de ce qui suit :

*Article premier*

DÉFINITIONS

Aux fins du présent Accord,

1. Le terme « investissement » s'entend, conformément aux lois et règlements de la Partie contractante sur le territoire de laquelle l'investissement a été effectué, de toute catégorie d'actif investi par des investisseurs d'une Partie contractante sur le territoire de l'autre Partie contractante en accord avec la législation de celle-ci. Il désigne en particulier, mais non exclusivement :

a) La propriété de biens meubles et immeubles ainsi que les autres droits réels, tels qu'hypothèque, cautionnement et privilège;

b) Les actions, parts sociales et toute autre type de participation dans des sociétés;

c) Les titres de crédit et les droits à des prestations ayant une valeur économique; les emprunts ne sont inclus que s'ils sont régulièrement contractés et dûment attestés conformément aux textes en vigueur dans le pays où cet investissement est effectué et s'ils sont liés à un investissement spécifique;

d) Les droits de propriété intellectuelle, y compris en particulier les droits d'auteur, brevets, dessins industriels, marques, noms commerciaux, procédés techniques, connaissances techniques et droits d'accès;

e) Les concessions économiques accordées par la loi ou par contrat ainsi que toutes autorisations et tous permis délivrés conformément à la loi.

Toute modification apportée à la forme juridique sous laquelle les actifs et les capitaux ont été investis ou réinvestis est sans effet sur la qualification d'investissements ainsi définis par le présent Accord.

<sup>1</sup> Entré en vigueur le 1<sup>er</sup> février 1995 par notification, conformément à l'article X.



Le présent Accord s'applique à tous les investissements effectués avant ou après la date de son entrée en vigueur, mais ses dispositions ne sont pas applicables aux contestations, réclamations ou différends dont l'origine est antérieure à son entrée en vigueur.

2. Le terme « investisseur » s'entend de :

a) Toute personne physique qui a la qualité de ressortissant de l'une des Parties contractantes conformément à la législation de celle-ci;

b) Toute personne morale constituée conformément aux lois et règlements de l'une des Parties contractantes et ayant son siège sur le territoire de ladite Partie contractante, qu'elle soit ou non à but lucratif.

3. Les dispositions du présent Accord ne s'appliquent pas aux investissements effectués sur le territoire d'une Partie contractante par des personnes physiques ayant la qualité de ressortissant de l'autre Partie contractante, si à la date de l'investissement les personnes en question étaient domiciliées depuis plus de deux ans sur le territoire de cette dernière Partie contractante, à moins qu'il ne soit prouvé que l'investissement autorisé sur ledit territoire était d'origine extérieure.

4. Le terme « gain » s'entend de toutes les sommes produites par un investissement, telles que les bénéfices, dividendes, intérêts, redevances ou autres revenus courants.

5. Le terme « territoire » s'entend du territoire national, y compris les zones maritimes adjacentes à la limite extérieure de la mer territoriale du territoire national sur laquelle la Partie contractante concernée peut exercer des droits souverains ou sa juridiction conformément à sa législation et au droit international.

## *Article II*

### ENCOURAGEMENT DES INVESTISSEMENTS

Chaque Partie contractante encourage les investissements sur son territoire par des investisseurs de l'autre Partie contractante et autorise lesdits investissements conformément à ses lois et règlements.

## *Article III*

### PROTECTION DES INVESTISSEMENTS

1. Conformément aux normes et principes du droit international, chaque Partie contractante assure à tout moment un traitement juste et équitable aux investissements effectués par les investisseurs de l'autre Partie contractante et compromet pas, par des mesures injustifiées ou discriminatoires, leur gestion, leur maintien, leur utilisation, leur jouissance ou leur cession.

2. Une fois qu'elle a autorisé des investissements sur son territoire par des investisseurs de l'autre Partie contractante, chaque Partie contractante assurera une protection juridique totale à ces investissements et leur accorde un traitement qui n'est pas moins favorable que celui dont bénéficient les investissements effectués par ses propres investisseurs ou par les investisseurs de pays tiers.

3. Sans préjudices des dispositions du paragraphe 2 du présent article, le traitement de la nation la plus favorisée ne s'applique pas aux privilèges que chaque

Partie contractante accorde aux investisseurs d'un pays tiers en raison de sa participation ou de son association à une zone de libre échange, à une union douanière, à un marché commun ou à un accord régional.

4. Les dispositions du paragraphe 2 ne sont pas interprétées comme pouvant obliger une Partie contractante à étendre aux investissements de l'autre Partie contractante le bénéfice de tout traitement, de toute préférence ou de tous privilèges accordés en vertu d'un accord international concernant en totalité ou en partie des questions fiscales.

#### *Article IV*

##### EXPROPRIATIONS ET INDEMNISATIONS

1. Les Parties contractantes s'interdisent de prendre des mesures d'expropriation ou de nationalisation ou toutes autres mesures ayant le même effet à l'encontre d'investissements se trouvant sur son territoire et appartenant à des investisseurs de l'autre Partie contractante à moins que lesdites mesures ne soient décidées pour des raisons d'utilité publique, n'aient pas de caractère discriminatoire et qu'elles soient conforme à la loi. La légalité de l'expropriation est soumise au contrôle de l'autorité judiciaire.

Les mesures susmentionnées sont assorties de dispositions qui prévoient une indemnisation prompte, adéquate et effective. Le montant de l'indemnité représente la valeur marchande que l'investissement exproprié avait immédiatement avant d'être exproprié ou, le cas échéant, avant que l'imminence de l'expropriation ne soit connue du public; elle comporte les intérêts échus depuis la date de l'expropriation calculés au taux commercial normal : elle est versée sans délai et est effectivement réalisable et librement transférable.

2. Les investisseurs d'une Partie contractante dont les investissements sur le territoire de l'autre Partie contractante subissent des pertes, par suite d'une guerre ou de tout autre conflit armé, d'un état d'urgence nationale, d'une révolte, d'une insurrection ou d'une émeute, bénéficient de la part de cette dernière, pour ce qui est des restitutions, indemnisations, dédommagements ou autres règlements, d'un traitement non moins favorable que celui que ladite Partie contractante accorde à ses propres ressortissants ou aux investisseurs d'un Etat tiers. Les sommes versées sont librement convertibles.

#### *Article V*

##### TRANSFERTS

1. Chaque Partie contractante garantit qu'elle n'imposera pas de restriction au libre transfert des investissements et des gains des investisseurs de l'autre Partie contractante et en particulier, mais non exclusivement pour ce qui est :

a) Des capitaux et des fonds additionnels nécessaires à la préservation et au développement des investissements;

b) Des profits, bénéfiques, intérêts, dividendes et autres revenus courants;

c) Des fonds destinés à rembourser les emprunts visés à l'alinéa c du paragraphe 1 de l'article premier;

- d) Des redevances;
- e) Du produit de la vente ou de la liquidation totale ou partielle d'un investissement;
- f) Des indemnités prévues à l'article IV.

2. Les transferts sont effectués sans retard en devises librement convertibles, dans les conditions normales de change en vigueur à la date du transfert, conformément à la procédure établie par la Partie contractante sur le territoire de laquelle l'investissement a eu lieu. La procédure en question ne peut modifier la nature des droits énoncés dans le présent article.

### *Article VI*

#### SUBROGATION

1. Si une Partie contractante ou une de ses entités ou de ses entreprises publiques a versé une somme à l'un de ses investisseurs au titre d'une garantie ou d'une assurance contre des risques non commerciaux en raison d'un investissement effectué sur le territoire de l'autre Partie contractante, celle-ci reconnaît la validité de la subrogation du payeur dans les droits ou les créances dudit investisseur ainsi que son droit à les faire valoir. L'investisseur ne peut exercer que les droits qui ne sont pas l'objet de la subrogation.

2. Si en raison de la subrogation visée au présent article, une Partie contractante acquiert des biens ou des droits qui ne sauraient appartenir à des Etats étrangers en vertu de la constitution ou des lois de l'autre Partie contractante, elle doit les transférer sans plus tarder à quiconque est habilitée à les posséder.

### *Article VII*

#### APPLICATION D'AUTRES PRESCRIPTIONS

Si les dispositions de la législation de l'une ou l'autre Partie contractante ou les obligations de droit international liant, en sus du présent Accord, les Parties contractantes soit actuellement, soit à l'avenir ou si un accord conclu entre un investisseur d'une Partie contractante et l'autre Partie contractante contient des prescriptions, générales ou particulières, qui accordent aux investissements effectués par les investisseurs de l'autre Partie contractante un régime plus favorable que celui qui est prévu par le présent Accord, lesdites prescriptions l'emportent sur celles du présent Accord dans la mesure où elles sont plus favorables.

### *Article VIII*

#### RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS ENTRE LES PARTIES CONTRACTANTES

1. Les différends qui surgissent entre les Parties contractantes à propos de l'interprétation ou de l'application des dispositions du présent Accord sont, si possible, réglés par la voie diplomatique.

2. Si un différend entre les Parties contractantes ne peut pas être réglé de cette manière dans un délai de six mois à compter du début des négociations, il est porté, à la demande de l'une ou l'autre Partie contractante, devant un tribunal d'arbitrage.

3. Ledit tribunal d'arbitrage est constitué comme suit pour chaque affaire particulière. Dans les deux mois qui suivent la réception de la demande d'arbitrage, chaque Partie contractante désigne un membre du tribunal. Les deux membres en question choisissent un ressortissant d'un Etat tiers qui, avec l'approbation des deux Parties contractantes, est nommé Président du tribunal. Le Président est nommé dans un délai de deux mois courant à compter de la date de désignation des deux autres membres.

4. Si les désignations nécessaires ne sont pas effectuées dans les délais visés au paragraphe 3 du présent article, l'une ou l'autre Partie contractante peut, en l'absence de tout autre arrangement, inviter le Président de la Cour internationale de Justice à procéder aux nominations nécessaires. Si le Président est un ressortissant de l'une des Parties contractantes ou si, pour quelque raison que ce soit, il ne peut pas s'acquitter de cette fonction, le Vice-Président est invité à procéder aux nominations nécessaires. Si le Vice-Président est un ressortissant de l'une des Parties contractantes ou s'il est lui aussi dans l'impossibilité de procéder aux nominations nécessaires, le membre de la Cour internationale de Justice qui le suit immédiatement dans l'ordre de préséance et qui n'est pas un ressortissant de l'une des Parties contractantes est invité à procéder aux nominations nécessaires.

5. Le tribunal d'arbitrage prend ses décisions à la majorité des voix. Cette décision est obligatoire pour les deux Parties contractantes. Chaque Partie contractante prend à sa charge les frais de son membre du tribunal et de sa représentation dans la procédure d'arbitrage. Les frais du Président ainsi que les autres dépenses sont en principe assumés pour moitié par les Parties contractantes. Toutefois, le tribunal d'arbitrage peut indiquer dans sa décision qu'une proportion supérieure des frais est à la charge de l'une des Parties contractantes et cette sentence est obligatoire pour les deux Parties contractantes. Le tribunal décide de sa propre procédure.

#### *Article IX*

#### RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS ENTRE UN INVESTISSEUR ET LA PARTIE CONTRACTANTE SUR LE TERRITOIRE DE LAQUELLE L'INVESTISSEMENT A ÉTÉ EFFECTUÉ

1. Tout différend entre un investisseur d'une Partie contractante et l'autre Partie contractante au sujet de l'exécution par celle-ci des dispositions du présent Accord est dans la mesure du possible réglé par voie de consultations à l'amiable.

2. Si le différend n'a pas pu être réglé dans un délai de six mois courant à partir de la date à laquelle il a été constaté par l'une ou l'autre des parties, il peut, à la demande de l'investisseur :

- Soit être porté devant les tribunaux compétents de la Partie contractante sur le territoire de laquelle l'investissement a été effectué,
- Soit être soumis à l'arbitrage international dans les conditions énoncées au paragraphe 3.

Une fois que l'investisseur a porté son différend devant les juridictions de la Partie contractante en cause ou l'a soumis à l'arbitre international, le choix de l'une ou l'autre de ces voies de recours est définitif.

3. Si l'investisseur décide de soumettre le différend à l'arbitrage, il saisit le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements

(CIRDI), créé par la Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d'autres Etats, ouverte à la signature à Washington le 18 mars 1965<sup>1</sup>, si chacun des Etats Parties au présent Accord a adhéré à ladite Convention. Si tel n'est pas le cas, chaque Partie contractante consent à ce que le différend soit soumis à l'arbitrage conformément au règlement du Mécanisme complémentaire du CIRDI pour l'administration des procédures de conciliation, d'arbitrage ou d'enquêtes.

Si pour un motif quelconque, il n'est pas possible de recourir au CIRDI, ni à son Mécanisme complémentaire, le différend peut être soumis, à la demande de l'investisseur, à un tribunal d'arbitrage spécial constitué conformément aux règles d'arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI)<sup>2</sup>.

4. La sentence arbitrale se contente de déterminer si la Partie contractante en cause ne s'est pas conformée au présent Accord et si, ce faisant, elle a causé un dommage à l'investisseur et, dans ce cas, elle se borne à fixer le montant de l'indemnité correspondante.

5. Les sentences arbitrales sont définitives et obligatoires pour les parties au différend. Chaque Partie contractante les exécute conformément à sa législation.

#### Article X

##### ENTRÉE EN VIGUEUR, DURÉE ET DÉNONCIATION

1. Le présent Accord entrera en vigueur le premier jour du second mois qui suivra la date à laquelle les Parties contractantes se notifieront par écrit qu'elles ont accompli, chacune en ce qui la concerne, les formalités constitutionnelles requises pour sa mise en application. La durée de sa validité est de dix ans. Passé ce délai, il restera en vigueur jusqu'à l'expiration d'une période de douze mois courant à compter de la date à laquelle l'une des Parties contractantes aura notifié par écrit à l'autre Partie contractante sa décision d'y mettre fin.

2. S'agissant des investissements effectués avant la date à laquelle la notification de dénonciation du présent Accord produira ses effets, les dispositions des articles premier à IX continueront de s'appliquer pendant une période de dix ans courant à partir de cette date.

FAIT à Caracas le 18 novembre 1993 en deux exemplaires originaux, en langue espagnole, les deux textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement  
de la République du Venezuela :

Le Ministre  
des relations extérieures,  
FERNANDO OCHOA ANTICH

Pour le Gouvernement  
de la République de l'Equateur :

Le Ministre  
des relations extérieures,  
DIEGO PAREDES PEÑA

<sup>1</sup> Nations Unies, *Recueil des Traités*, vol. 575, p. 159.

<sup>2</sup> *Ibid.*, *Documents officiels de l'Assemblée générale, trente-et-unième session, Suppléments n° 17 (A/31/17)*, p. 36.

